



**EL LABERINTO**

# **BLANCO**

*COCAINA Y PODER POLITICO*

*RENSELAER W. LEE III*



**CEREC**



Rensselaer W. Lee II es presidente del Global Advisory Services, Inc, en Alejandría, Virginia, e investigador asociado con el Foreign Policy Research Institute, en Filadelfia, Pennsylvania, en los Estados Unidos de Norteamérica.

ISBN 958-9061-57-5

Este libro presenta los resultados de un estudio sobre el desarrollo de la industria de la cocaína en Suramérica en los años ochenta, realizado con base en trabajo de campo en Colombia, Bolivia y Perú, y en diversas fuentes periodísticas y oficiales de todos los países comprometidos en el problema.

En él su autor analiza los diferentes aspectos culturales, políticos y económicos que influyen en dicha industria, y discute los lugares comunes que se han cernido sobre el problema, mostrando los determinantes de la demanda de la cocaína como principal vector para su control y una definitiva solución al conjunto de dificultades que ella entraña para nuestros países.

Con la publicación en español de este texto, editado originalmente en inglés, en los Estados Unidos, el CEREC presenta a los lectores nacionales y del continente un nuevo texto sobre este aspecto central de las realidades colombiana y latinoamericana, el cual, junto con su anterior título de Alvaro Camacho Guizado "Droga y Sociedad en Colombia", se constituye en fuente original para el conocimiento de la industria y el **problema** de la cocaína, y sus perspectivas reales de solución.

## CONTENIDO

Agradecimientos . . . . .	9
Prefacio a esta edición en español . . . . .	11
Prefacio a la edición original en inglés . . . . .	23
Introducción . . . . .	29
La coca y la cocaína . . . . .	53
El lobby de la coca . . . . .	95
La mafia de la cocaína . . . . .	149
La conexión narco-guerrilla . . . . .	217
El panorama de la ley . . . . .	261
Conclusión: el dilema de la política de los Estados Unidos . . . . .	309
Glosario . . . . .	329
Bibliografía . . . . .	331

— *Traducción y edición en español por Mama Coca*  
— *Traducción y edición en inglés por Mama Coca*  
— *Traducción y edición en español por Mama Coca*  
— *Traducción y edición en inglés por Mama Coca*  
— *Traducción y edición en español por Mama Coca*  
— *Traducción y edición en inglés por Mama Coca*

## PREFACIO A ESTA EDICION EN ESPAÑOL

Han transcurrido dos años desde la publicación de "The White Labyrinth". Los hechos ocurridos en este tiempo no alteran la conclusión básica de este escritor: que la lucha antinarcoóticos en los Andes no afectaría significativamente la oferta de cocaína en los mercados internacionales. Es cierto que los gobiernos andinos son más conscientes del daño que el tráfico de la cocaína causa a sus respectivas sociedades. Tales cambios de actitud han llevado a nuevas e importantes iniciativas antidroga, especialmente en Colombia. No obstante, las noticias del frente de la cocaína aún no son alentadoras. En Colombia —a pesar de una gran ofensiva contra el cartel de Medellín en 1989-1990— las principales asociaciones de traficantes se mantienen bien afianzadas. Han penetrado en la sociedad y en la estructura de poder a todos los niveles; mantienen su capacidad de entorpecer las iniciativas del gobierno para hacer cumplir la ley; y continúan exportando enormes cantidades de cocaína a los Estados Unidos y a otros mercados internacionales.

En las fases iniciales de la industria, los gobiernos andinos aún parecen impotentes para obligar o inducir a los cientos de miles de familias campesinas cultivadoras de coca a que destruyan sus ilegales cultivos. En Bolivia, país en el cual el lobby de la coca es una poderosa fuerza dentro del sistema político nacional, no se realiza casi ninguna erradicación voluntaria. El gobierno boliviano está comprometido en un continuo y esencialmente improductivo diálogo con los representantes de los coqueros acerca de los programas, cronogramas e incentivos para la erradicación. En 1990, en el Perú, se suspendió, quizás defini-

tivamente, un programa de reducción de cultivos de coca financiado por los Estados Unidos, el cual destruyó 18.000 hectáreas en el Valle del Alto Huallaga entre 1983 y 1989. La suspensión se ajustaba a ciertas realidades políticas: el Perú no puede librar una campaña efectiva contra la guerrilla de Sendero Luminoso, la cual actualmente controla gran parte del Valle, sin antes recuperar el apoyo de la población local, y gran parte de esa población —de 65% a 75% de la fuerza laboral rural, según cálculos recientes— se dedica al cultivo de la coca. Como lo afirma un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos en 1991, "la erradicación a escala total no es políticamente viable en este momento" en ese Valle.<sup>1</sup>

A continuación trataremos con mayor detalle los problemas y perspectivas del control de la industria de la cocaína en los Andes. Colombia será el tema principal de la discusión, ya que es allí donde la guerra contra la mafia de la cocaína se ha librado con mayor intensidad.

### EL CASO COLOMBIANO

Los recientes y dramáticos hechos en Colombia ponen de manifiesto con realismo —y dentro de una perspectiva desalentadora— el papel de las estrategias para controlar la oferta de cocaína desde los Andes. En el caso colombiano, un gobierno decidido trató de desafiar a una de las empresas criminales más poderosas, flexibles y peligrosas del mundo. En el conflicto resultante, la industria de la cocaína sufrió enormes pérdidas, pero al final prevaleció con su estructura básica y su maquinaria más o menos intactas.

Después del asesinato del candidato liberal a la presidencia, Luis Carlos Galán, en agosto de 1989, el gobierno de Virgilio Barco desencadenó una amplia persecución al cartel de Medellín. El gobierno apeló a un decreto de emergencia, el cual preparó el camino para la extradición de narcotraficantes por vía administrativa —es decir, la extradición no autorizada previamente por una decisión de la corte o por un tratado internacional vigente. (En junio de 1987, la Corte Suprema de Justicia invalidó efectivamente un tratado de extradición de 1979 entre los Estados Unidos y Colombia). Entre agosto de 1989 y diciembre de 1990, el gobierno envió más de 20 sospechosos de narcotráfico a los

1. U.S. Department of State. *International Narcotics Control Strategy Report*. Washington, D.C., Department of State, marzo de 1991, p. 121.

Estad...  
al gob...  
bienes...  
tráfico...  
asoci...  
una ca...  
guez C...  
respal...  
de Wa...  
inicial...  
Adema...  
chos c...  
Fin...  
tuvo u...  
Los pr...  
Unido...  
de pur...  
cocaín...  
de la p...  
colomb...  
junio d...  
Perú y...  
de juli...  
coca b...  
coca y...  
bolivia...  
Unidos...  
No c...  
de la c...  
habían...  
se hab...  
por ma...  
de con...  
pureza...  
—87%...  
Colom...

Estados Unidos para ser juzgados. Otro decreto de emergencia permitió al gobierno confiscar las propiedades, aviones, dinero, armas y otros bienes. Por lo menos 125 millones de dólares de bienes de los narcotraficantes que pertenecían a los jefes del cartel de Medellín y a sus asociados fueron decomisados bajo este decreto.<sup>2</sup> El gobierno inició una cacería masiva contra Pablo Escobar Gaviria, José Gonzalo Rodríguez Gacha y otros jefes de Medellín. Esta política de línea dura fue respaldada por casi 200 millones de dólares en ayuda militar y policial de Washington durante los años fiscales de 1989 y 1990; tuvo un éxito inicial al desarticular las operaciones del tráfico del cartel de Medellín. Además, esta política indudablemente hizo menos atractivo para muchos colombianos involucrarse en el gran tráfico de la cocaína.

Finalmente, sin embargo, la ofensiva contra el cartel de Medellín tuvo un efecto insignificante en los mercados mundiales de cocaína. Los precios de la cocaína al por mayor aumentaron en los Estados Unidos aproximadamente en un 20% entre 1989 y 1990; los niveles de pureza bajaron en un 8%; lo que indica que estaba enviando menos cocaína al mercado de los Estados Unidos. Los precios de la hoja y de la pasta de coca se desplomaron a medida que los compradores colombianos redujeron sus expediciones al Perú y Bolivia. De abril a junio de 1990, los precios de la hoja en el Valle del Alto Huallaga del Perú y en el Chapare boliviano era entre 65% y 75% más bajos que de julio a septiembre de 1989. En 1990, unos 6.000 cultivadores de coca boliviana erradicaron voluntariamente más de 8.000 hectáreas de coca y recibieron pagos en efectivo y otros estímulos del gobierno boliviano (provenientes de fondos de apoyo económico de los Estados Unidos) para cambiar sus cultivos por otros legales.

No obstante, en el segundo trimestre de 1991, la industria colombiana de la cocaína se había obviamente reorganizado. Las exportaciones habían alcanzado los niveles de 1989, los precios de la hoja de la coca se habían recuperado de la baja de 1990 y el precio de la cocaína al por mayor en los Estados Unidos era igual o inferior al del momento de comenzar la persecución. En marzo de 1991, según la DEA, la pureza de la cocaína era de 7% por encima del promedio de 1990 —87% comparado con 80%. Funcionarios de los Estados Unidos y Colombia tienen la teoría de que los choques con las autoridades

2. MARY COOPER. *The Business of Drugs*. Washington, D.C.: Congressional Quarterly, Inc. 1990, p. 18.

afectaron al cartel de Medellín y de que se han abierto las puertas para que la asociación rival de Cali y otros grupos de traficantes se apoderen de una mayor parte del negocio de la cocaína. Sin embargo, la asociación de Medellín probablemente ha mostrado suficiente flexibilidad para reconstruir algunas de las redes de oferta y distribución que fueron quebrantadas durante la persecución por ejemplo, con el traslado de algunas instalaciones de procesamiento de cocaína fuera de Colombia la creación de rutas de exportación de cocaína por países vecinos en Suramérica y la compra de nuevas acciones y barcos para reemplazar los decomisados por las autoridades colombianas.

En 1989-1990, la búsqueda masiva de los jefes del cartel de Medellín tuvo mayor éxito. Las autoridades colombianas encontraron y mataron a dos importantes traficantes: Gonzalo Rodríguez Gacha, considerado como jefe importante del cartel de Medellín, y Gustavo de Jesús Gaviria Rivera, primo hermano y socio muy próximo de Pablo Escobar. Sin embargo, el gobierno no logró capturar a Escobar, a los hermanos Ochoa, ni a otras personas claves del grupo de Medellín. (Escobar eludía constantemente a las autoridades, a pesar de varias campañas de acorralamiento realizadas por miles de soldados colombianos, el DAS y tropas de la policía élite). Es probable que los traficantes hayan sido advertidos de las redadas y pesquisas del gobierno y que los traficantes hayan instalado una extensa red de informantes en los sistemas de comando y control de los militares y de la policía nacional. Como lo anotó sarcásticamente un antiguo socio convertido en enemigo de Escobar, en abril de 1991: "No pudieron capturar a Pablo Escobar porque la mitad de los que trabajan para el gobierno lo está protegiendo, mientras que la otra mitad lo está persiguiendo".<sup>3</sup>

Si las tácticas de persecución tuvieron un éxito limitado desde el punto de vista del cumplimiento de la ley, sus consecuencias para la sociedad colombiana fueron catastróficas. En un comunicado expedido el 23 de agosto, los Extraditables (nombre colectivo adoptado por los miembros de la asociación de Medellín) declararon "una guerra extensa y total" contra el gobierno, la "oligarquía industrial y política", periodistas enemigos, magistrados que extraditaran a los narcotraficantes y otros que "nos han perseguido en el pasado".<sup>4</sup> La estrategia de guerra

3. "El enemigo de Escobar". *Semana*. Abril 16. 1991. pp. 14-22.

4. "Los traficantes declaran la guerra", Bogotá Emisoras Caracol. 1218 GMT, agosto 24 de 1989.

total de  
ción civ  
una ola  
colombi  
ellos mu  
millones  
desvane

Una d  
a finales  
estaban  
favor de  
Una enc  
de 1990  
de conc  
dispuest  
esto con

Las m  
rilla en  
de contr  
biano de  
propieda  
miento,  
Escobar  
y a sus  
blanco c  
ayudó a  
anticom  
rones de  
desband  
guerrilla

El su  
como pr  
pública

5. CA  
Económic  
6. "La  
7. "Su  
Espectado

total de la mafia se valía de ataques de amplio impacto sobre la población civil. Durante los meses siguientes, los Extraditables desataron una ola de bombas, asesinatos y secuestros que sacudieron a la sociedad colombiana, cobrando la vida de más de 1.000 colombianos, entre ellos muchos civiles, y causando pérdidas directas e indirectas de millones de dólares. El apoyo popular a la guerra de la droga se desvaneció rápidamente.

Una encuesta en cinco ciudades importantes, publicada en *Semana* a finales de diciembre de 1989, reveló que 58% de los encuestados estaban a favor de las negociaciones con los traficantes, y un 64% a favor del indulto a los narcotraficantes si se decidían a dejar el negocio.<sup>5</sup> Una encuesta realizada por la revista *Semana* de Bogotá en noviembre de 1990 concluía que más de 60% de los colombianos estaban a favor de conceder la amnistía a los traficantes y que más del 80% estaban dispuestos a aceptar a un Extraditable como ministro del gabinete, si esto contribuyera a lograr la paz en Colombia.<sup>6</sup>

Las medidas enérgicas también agravaron los problemas de la guerrilla en Colombia, al desviar el pie de fuerza militar de las operaciones de contrainsurgencia. Aproximadamente el 10% del ejército colombiano de 117.000 hombres se destinó a vigilar los 1.800 edificios y propiedades de los narcotraficantes; allí realizaban tareas de mantenimiento, tales como alimentar a los animales del zoológico de Pablo Escobar. Miles más indudablemente estaban persiguiendo a Escobar y a sus colegas y protegiendo a las personas y edificios que eran el blanco de los narcoterroristas. La persecución del gobierno también ayudó a los insurgentes, al minar algunos de los grupos paramilitares anticomunistas que habían sido organizados y financiados por los barones de la droga de Medellín. Algunos grupos paramilitares se han desbandado, creando un cierto vacío de poder y permitiendo a las guerrillas filtrarse de nuevo en sus anteriores fuertes.

El sucesor de Barco, César Gaviria Trujillo, quien se posesionó como presidente en agosto de 1990, afrontó una abrumadora presión pública para resolver el conflicto de la droga<sup>7</sup> y lograr un acuerdo con

5. CARLOS ARRIETA et al. *Narcotráfico en Colombia: Dimensiones Políticas, Económicas, Jurídicas e Internacionales*. Bogotá: Tercer Mundo, 1990, p. 358.

6. "La gran encuesta". *Semana*. Enero 8, 1991, p. 29.

7. "Surgen problemas con propiedades decomisadas a los narcotraficantes". *El Espectador*. Febrero 17 de 1991, p. 11A.

mucho el negocio de la cocaína. A pesar de un récord en decomisos de 46 toneladas de cocaína en los primeros nueve meses de 1991, los envíos de cocaína desde Colombia continúan en el orden de 500 a 700 toneladas, según la DEA.<sup>10</sup>

Las ofertas del gobierno de indulgencia judicial a la mafia de Medellín fueron en esencia un ejercicio de resolución de conflictos. Para Colombia, como lo subrayó Cesar Gaviria, acabar con el narcoterrorismo —“la principal amenaza a nuestra democracia”— constituye una prioridad mucho mayor que acabar con el narcotráfico en sí; Gaviria definió este último como un problema internacional que se reducirá sólo cuando los países consumidores disminuyan su demanda de narcóticos.<sup>11</sup> Bajo el tratado de paz que se forjó en 1990 y 1991, los barones de la cocaína tenían pocos estímulos para entregar sus propiedades producto del narcotráfico (tales como laboratorios, instalaciones para transporte y valores financieros) o para proveer información de inteligencia acerca del comercio de la droga. El error clave del gobierno fue el haber estado dispuesto a levantar la amenaza de extradición sin exigir a los traficantes dar testimonio en contra de sus cómplices y cooperar para desmantelar sus negocios. (Pablo Escobar se ha descrito a sí mismo como un simple auxiliar del cartel de Medellín y se ha declarado culpable de sólo un cargo de tráfico de cocaína: un envío, en 1987, de 200 libras de cocaína vía la isla caribeña de Guadalupe). Es más, las iniciativas de paz del gobierno de Gaviria no han provocado un desmantelamiento masivo del negocio de la cocaína de parte de los traficantes. Aunque los extraditables expidieron un comunicado, en noviembre de 1990, hablando sobre la posible entrega de 200 a 300 traficantes, hasta la fecha solamente unos 20 miembros del cartel de Medellín se han entregado, amparados por el decreto de Gaviria. Además, los hermanos Rodríguez Orejuela, José Santacruz Londoño, Francisco Herrera y otros jefes de Cali no han mostrado deseo de entregarse al gobierno, ni éste ha hecho un esfuerzo serio para capturar a estos traficantes.

Teniendo en cuenta anteriores gestos de los barones de la droga de Colombia, el arreglo del gobierno con el cartel de Medellín fue una enorme decepción. En 1984, en Panamá, los narcotraficantes ofrecieron retirarse definitivamente del negocio de la cocaína, entregar aviones,

10. JAMES BROOKE. "Gaviria's Gambit". *The New York Times Magazine*. Octubre 13 de 1991, p. 42.

11. "La paz del país es mi reto histórico". *El Tiempo*. Agosto 8 de 1990, p. 8A.

postas de aterrizaje y laboratorios; y además dismantelar la "infraestructura total" de sus empresas. El temor a la extradición provocó estas concesiones de largo alcance de parte de los traficantes. Sin embargo, la fuerte oposición del Departamento de Estado de los Estados Unidos y la intensa resistencia interna (basada seguramente en la moralidad de las negociaciones con los traficantes) impidió que Colombia explorara la invitación de los traficantes.

En enero de 1990, después de cuatro meses de un sangriento conflicto con el Estado, los Extraditables de Medellín hicieron una propuesta de alguna manera parecida. Prometían "suspender el envío de drogas y entregar armas, aviones, laboratorios, pistas de aterrizaje clandestinas" y otros bienes, a cambio de "garantías constitucionales y legales" no especificadas.<sup>12</sup>

En febrero de 1990, en vísperas de una reunión cumbre de representantes de los Estados Unidos y de los países productores de coca en Cartagena, los traficantes en efecto entregaron al gobierno colombiano tres de sus más modernos laboratorios de cocaína, (El complejo de laboratorios, ubicado en la región de Urabá, en los departamentos de Chocó y Antioquia, según informes producía entre 12 y 10 toneladas de cocaína al mes y había tenido un costo de construcción de 20 millones de dólares). El negociar un acuerdo con los traficantes no era parte de los propósitos del gobierno de Barco en ese entonces; por lo tanto, es probable que se haya perdido otra oportunidad de asestar un buen golpe a la mafia de la cocaína en Colombia.

César Gaviria, por supuesto, logró un acuerdo negociado con los traficantes, pero éste tuvo muy poco significado desde el punto de vista de la legalidad. Dos de los fundadores de la coalición de Medellín, Jorge Ochoa y Pablo Escobar (ambos, a propósito, habían representado a los traficantes en las conversaciones con Alfonso López Michelsen y Carlos Jiménez Gómez en Panamá) están bajo custodia; sin embargo, ellos no han entregado ninguno de los bienes de sus empresas a las autoridades colombianas - ni laboratorios, ni armas, ni aviones. Su entrega no ha producido ningún testimonio que pueda ofrecer un panorama más comprensible sobre las organizaciones del tráfico de la cocaína y sus empresas aliadas. Tales concesiones no fueron requeridas

12. Foreign Broadcast Information Service. "Text of Communique Issued by the Extraditables". *Daily Report: Latin America*. Enero 18 de 1990. Desde Bogotá, Invasión, Cadena 1, enero 17 de 1990.

para e  
ya fue

Tal  
biano,  
sus tá  
narcot  
del pr  
ción d  
la inic  
nativa  
los po  
la gue  
soluci  
la nuc  
táctica  
de la l  
persua  
con lo  
teoría  
como  
piezas  
nadas  
posibi  
así ex  
valios  
rendic  
estímu  
y coop  
ción c  
de jus  
una pr

Las  
Bolivi

para evitar la extradición bajo el plan de paz de Gaviria; y la extradición ya fue eliminada por votación en la Asamblea Constituyente.

Tales críticas, sin embargo, no deben exagerarse. El gobierno colombiano, y especialmente César Gaviria, merecen reconocimiento por sus tácticas novedosas para reducir el narcoterrorismo y llevar a los narcotraficantes ante a la justicia. La política general anti-narcóticos del presidente es sumamente popular en Colombia (recibió una aprobación del 72% en una encuesta publicada en julio pasado).<sup>13</sup> Además, la iniciativa de paz de Gaviria debe tomarse en serio como una alternativa política a la represión. Actualmente los gobiernos andinos, ante los poderosos lobbies de narcóticos y ante una población fatigada con la guerra de la cocaína, consideran que los costos políticos de las soluciones represivas son cada vez más prohibitivos. Es probable que la nueva estrategia andina de la cocaína requiera de una mezcla de tácticas duras y suaves - los objetivos convencionales de imposición de la ley tendrían que combinarse con fuertes elementos de negociación, persuasión y manipulación política. Los diálogos y las negociaciones con los protagonistas claves en la industria de la cocaína podrían, en teoría, aprovecharse para obtener los objetivos de la ley, especialmente como una herramienta de inteligencia. Obviamente, muchas de las piezas perdidas del rompecabezas de la cocaína podrían ser proporcionadas por los mismos narcotraficantes. (En los Estados Unidos, la posibilidad de negociar la declaración del acusado, "plea bargain" —y así extraer valioso testimonio de los delincuentes— ha sido un arma valiosa en la lucha contra el crimen organizado). El programa de rendición propuesto por Gaviria, sin embargo, no ofreció suficientes estímulos (positivos o negativos) a los traficantes para dar información y cooperar en el desmantelamiento de sus empresas. Quizás esta situación cambie a medida que Colombia restablezca su debilitado sistema de justicia penal, y que la reducción de la violencia interna se vuelva una prioridad menos urgente para el gobierno de Colombia.

#### EL PERU Y BOLIVIA

Las perspectivas de eliminar el tráfico de la cocaína en el Perú y Bolivia son poco halagadoras. En ambos países, grandes segmentos

13. "Así lo ven". *Semana*. Julio 30 de 1991. p. 26.

de la población —en realidad, economías completas— dependen de actividades relacionadas con la cocaína. (Según cálculos recientes, la cocaína emplea entre el 8% y el 9% de la población económicamente activa del Perú y entre el 14% y el 21% en Bolivia; además, las utilidades de las exportaciones de cocaína representaron casi un 40% de las ganancias por exportaciones legales del Perú en 1990). Las organizaciones de los cultivadores de coca están, por supuesto, muy bien establecidas en Bolivia y están adquiriendo mayor prominencia nacional y legitimidad en el Perú. (El Presidente Alberto Fujimori tuvo dos reuniones con los cultivadores en agosto de 1991, una en Lima y otra en Uchiza—reuniones que parecen confirmar la afianzada posición política de los agricultores peruanos—. Los cultivadores de coca andinos están ahora tratando de organizarse a escala internacional. En marzo de 1991, los cultivadores peruanos y bolivianos organizaron en La Paz el "Primer Encuentro Andino de Productores de Coca" para discutir sus quejas y formular estrategias comunes frente a la erradicación y sustitución de cultivos.

El problema de la coca en los Andes permanece tan inmanejable como antes. Hay en esencia una abundancia ilimitada tanto de tierra como de mano de obra para el cultivo de la coca en el Perú y Bolivia. La coca es una planta sumamente resistente y adaptable que se puede cultivar en muchos lugares tropicales de Suramérica; y las actuales condiciones económicas del Perú y Bolivia crean una fuente prácticamente inagotable de nuevos emigrantes a las regiones actuales y en potencia de cultivo de coca. Además, bajo las políticas y condiciones actuales, la coca típicamente es más rentable y más fácil de comercializar que otros productos agrícolas. A no ser que estas limitaciones cambien significativamente, el cultivo de la coca seguirá siendo una propuesta económica atractiva para los agricultores. Finalmente, la represión abierta del comercio de la coca no es una alternativa viable, ni política ni económicamente. Las sanciones penales —arresto, enjuiciamiento y encarcelamiento de las familias que cultivan coca ilegalmente— no son una solución práctica. Además, la amenaza de una erradicación por la fuerza también ha disminuido. Hasta Washington parece haber perdido la fe en el arma de la erradicación. Por ejemplo, la Estrategia Nacional para el Control de la Droga de la Casa Blanca de 1991 apenas mencionó la erradicación, haciendo énfasis en cambio en que "el mantener los precios bajos de la hoja de la coca por medio de acciones continuas de las agencias del orden debería crear un am-

bien

para

El

andir

los n

tendr

zas.

exigi

comp

La c

crédi

alto

fond

de p

andir

ralme

los c

induc

coca

a los

estim

cultiv

Coca

peru

Bol

tar

La

econo

actua

del c

en 19

posib

ladas

que l

con g

dema

14.

Contra

biente en el cual los agricultores pudieran cambiar a otras alternativas para obtener ingresos".<sup>14</sup>

El éxito en la lucha contra la industria de la cocaína en los países andinos tendrá que ocurrir por medio de negociaciones y acuerdos con los mismos productores. Además, en tales negociaciones, los gobiernos tendrán que valerse mucho más de incentivos positivos que de amenazas. No obstante, la experiencia anterior sugiere que los agricultores exigirían, por los ingresos de la coca que dejarían de obtener, una compensación mayor de la que los gobiernos andinos pueden ofrecerles. La compensación preferida comprende generosos pagos en efectivo, créditos, costosos programas de desarrollo y cultivos sustitutos de alto valor y rápido rendimiento. La asistencia para el desarrollo y los fondos de ayuda económica de los Estados Unidos aseguran una serie de programas de asistencia financiera y técnica para los agricultores andinos, especialmente en Bolivia. No obstante, los agricultores generalmente consideran que estos estímulos son insuficientes para cubrir los costos reales de la erradicación. El éxito de las negociaciones indudablemente dependerá de mantener los precios de la hoja de la coca lo suficientemente bajos (persiguiendo a los compradores de pasta, a los laboratorios de procesamiento y a la red de transporte) para estimular a los agricultores a que abandonen la coca a cambio de cultivos legales.

#### ACLARACION SOBRE LA INVESTIGACION

La industria de la cocaína en Suramérica parece ser una empresa económica mayor que la descrita en "El Laberinto Blanco". Los cálculos actuales del gobierno de los Estados Unidos sobre la posible producción del CHCL de cocaína en los Andes son de 880 a 1090 toneladas métricas en 1990; además, los Estados Unidos han elevado sus cálculos sobre posible producción del CHCL en 1987, que eran entre 320 y 415 toneladas métricas, a entre 835 y 1.040 toneladas métricas. Esto significa que las cifras de exportación neta de cocaína en 1987 (250 toneladas, con ganancias de 5.1 millones de dólares) son casi con seguridad demasiado bajas. Las nuevas cifras se obtuvieron de dos cálculos: el

---

14. La Casa Blanca. Office of National Drug Control Policy. *National Drug Control Strategy*. Washington, D.C. Febrero de 1991, p. 81.

primero fue reducir la proporción de conversión (de coca a cocaína) de 500:1 a 322-345:1 en el Perú y 195-330:1 en Bolivia. La proporción sigue siendo 500:1 en Colombia. Anteriormente, el gobierno había calculado una proporción de 500:1 para los tres países. El segundo consistió en calcular de nuevo la producción de la hoja de coca en el Perú y Bolivia para incluir el mayor rendimiento de los arbustos maduros. El rendimiento por hectárea de la hoja de coca se calculó en un promedio de 1.7 toneladas métricas en el Perú y 1.6 toneladas métricas en Bolivia en el período de 1987-1990; en 1987, el cálculo había sido de 1.0 y 1.4 toneladas métricas por hectárea respectivamente en los dos países.

Un punto adicional: la demanda todavía parece estar disminuyendo en los Estados Unidos, lo cual es, naturalmente, una buena señal. Una encuesta del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas mostró que sólo 1.6 millones de estadounidenses usaban cocaína regularmente en 1990, comparados con 2.9 millones de 1988 y 5.8 millones en 1985. Además, la Oficina de la Casa Blanca para Política del Control de Drogas muestra un descenso de 24% en el valor minoritario de las ventas de cocaína en 1988 a 1990. Desafortunadamente, el aumento del consumo de droga en Europa Occidental y en el Lejano Oriente está compensado en parte la reducción de las ventas en los Estados Unidos: los decomisos de cocaína en Europa Occidental aumentaron a más del doble entre 1989 y 1990, de 6 a 13 toneladas. Además, en tanto que la cocaína está perdiendo su atractivo en los Estados Unidos, el consumo de heroína parece ir en aumento. Como lo sugiere el reciente hallazgo de grandes cultivos de amapola para opio en el sur de Colombia, las organizaciones de traficantes de cocaína se están diversificando hacia la producción de heroína para satisfacer las necesidades de un creciente mercado en los Estados Unidos. Obviamente, éste es un suceso sumamente preocupante y peligroso.

En  
llega  
Munc  
mutu  
ricos  
y pres  
ferenc  
ganad  
Mund  
mente  
respec  
Estad  
en el  
cional  
Mund  
ción c  
formi  
El  
manif  
droga  
claran  
marib  
de 19  
ron er  
están

## PREFACIO A LA PRIMERA EDICION EN INGLES

En los últimos años el abuso y control de narcóticos ilegales ha llegado a colmar las relaciones de los Estados Unidos con el Tercer Mundo. El tema de la droga es causa de conflictos y recriminaciones mutuas entre Norte y Sur. Los principales países consumidores son ricos e industrializados; los principales países productores son pobres y predominantemente agrícolas. El tráfico de drogas genera una transferencia anual de miles de millones de dólares del Norte al Sur y ha ganado una firme posición económica en algunos países del Tercer Mundo. Los países productores y los consumidores se culpan mutuamente del creciente tráfico de drogas y abogan por las soluciones respectivas de controlar la oferta y la demanda. Los programas de los Estados Unidos para controlar el cultivo y la producción de la droga en el extranjero con frecuencia engendran resentimientos de corte nacionalista. Además, las clases políticas en algunos países del Tercer Mundo perciben las cruzadas antidroga como una significativa imposición de costos económicos y sociales, que a su vez generan nuevos y formidables retos políticos.

El tráfico de cocaína en el Hemisferio Occidental constituye una manifestación particularmente severa del conflicto Norte-Sur sobre la droga. Las preocupaciones de los Estados Unidos con la cocaína están claramente definidas. Mientras que las importaciones de heroína y marihuana a los Estados Unidos se mantuvieron más o menos estables de 1977 a 1987, las importaciones de cocaína aparentemente aumentaron entre cinco y diez veces en ese lapso de tiempo. Los traficantes están "literalmente arrojándola a nuestras costas", dice un Comisionado

de Aduanas de los Estados Unidos. 'El abuso de la cocaína y su derivado "crack" —sustancia altamente tóxica y adictiva— se ha convertido en un serio problema de salud pública en los Estados Unidos. Según datos de la Red de Advertencia sobre el Abuso de la Droga, en 1987 la sobredosis de cocaína fue la principal causa de 46.331 casos de hospitalización en urgencias y de 1.696 muertes; en 1980 las cifras correspondientes fueron de 4.154 y 250 respectivamente. "Las guerras de la cocaína" entre bandas rivales de traficantes han aumentado el número de asesinatos y reducido la calidad de vida en Washington, Nueva York, Miami y otras ciudades de los Estados Unidos.

Estados Unidos gasta considerables esfuerzos diplomáticos para urgir a Colombia, Bolivia y Perú —los principales países productores de cocaína— a que refrenen el cultivo y procesamiento ilegal de la droga. Estados Unidos también proporciona fondos, asistencia técnica y personal para programas de control de narcóticos en los tres países, a un costo anual de cincuenta a sesenta millones de dólares. Además, desde 1983, el Congreso de los Estados Unidos ha ido vinculando la ayuda externa a los logros en el control de narcóticos. Los países que no tomen las medidas adecuadas para controlar la producción y el tráfico ilícito de drogas y el lavado de dinero pueden perder cierta ayuda específica económica y militar, y el trato preferencial en el comercio, tales como cuotas azucareras o beneficios de la Iniciativa del Caribe.

Sin embargo, las tentativas de controlar la oferta obviamente no han logrado detener el flujo de cocaína a los mercados de Estados Unidos. Los gobiernos latinoamericanos carecen de los recursos para combatir el tráfico: No hay proporción entre los recursos disponibles para los narcotraficantes y aquellos destinados a combatirlos. Quizá más importante, sin embargo, es que los gobiernos y los grandes electorados de los principales países productores no apoyan incondicionalmente la guerra contra la cocaína. Esto es verdad aunque el tráfico de cocaína causa daño en muchos aspectos a los países productores: corrupción rampante, número creciente de adictos, niveles de violencia en aumento, nivel moral en decadencia, y una imagen nacional en deterioro son algunas de las consecuencias más obvias. Las razones de esta reticencia latinoamericana son complejas y se detallarán en los capítulos siguientes. No obstante debemos mencionar algunos aspectos desde ahora.

1. JOEL BRINKLEY, "Experts See U.S. Cocaine Problems Continuing Despite Anti-Drug Raids", *The New York Times*, Agosto 23, 1986, p. 26.

Primero  
serios cost  
tado una f  
andinos, y  
tamos ban  
gas, cobre  
cocaína es  
caracteriza  
de 500.000  
la cadena d  
procesamie  
del uno po  
el valor eq  
dores en l  
general un  
nos como  
producción  
que recibir

Segundo  
significativ  
y bien orga  
y campesin  
cantes de c  
importante  
también ha  
nales impo  
gislativos,  
iglesia, y l  
muestran u  
importante  
obras públ  
pobres en z

Tercero,  
América —  
los Estados  
como la ext  
militar con  
contra los  
sentimiento  
ricanos ven  
la droga de

Primero, tomar medidas contra el tráfico de la cocaína conlleva serios costos económicos y políticos. Los narcodólares han representado una fuente relativamente importante de divisas para los países andinos, ya que las fuentes tradicionales —inversión extranjera, préstamos bancarios y utilidades por exportaciones andinas como petróleo, gas, cobre y harina de maíz— se han reducido. La industria de la cocaína es una fuente importante de empleo e ingreso en regiones caracterizadas por una extremada pobreza y desempleo. Se calcula que de 500.000 a un millón de personas están empleadas directamente en la cadena de actividades de la industria —cultivo—, tratamiento inicial, procesamiento y contrabando. Los cultivadores de coca reciben menos del uno por ciento del valor final de su producto en la calle —es decir, el valor equivalente de la cocaína refinada que se vende a los consumidores en los países industrializados— y no obstante, reciben por lo general un ingreso bastante mayor del que percibirían de cultivos alternos como cacao, naranja y café. A lo largo de la cadena logística de producción de cocaína la gente recibe salarios mucho más altos de los que recibirían en la economía legal.

Segundo, la industria de la cocaína en general ha acumulado un significativo poder político. Los cultivadores de coca son numerosos y bien organizados; en Bolivia, las organizaciones nacionales de obreros y campesinos dan apoyo político directo a los cultivadores. Los traficantes de cocaína juegan el papel de agentes del poder y son fuente importante de financiación de las campañas políticas. Los traficantes también han penetrado y corrompido casi todas las instituciones nacionales importantes: fuerzas de policía, entidades militares, cuerpos legislativos, ministerios claves de los gobiernos, el poder judicial, la iglesia, y los medios de comunicación. Algunos traficantes de cocaína muestran un rudimentario sentido de responsabilidad social —un hecho importante que les permitió obtener respaldo popular— al patrocinar obras públicas y proyectos de bienestar social que benefician a los pobres en zonas urbanas y rurales.

Tercero, la guerra a la cocaína no es particularmente popular en Sur América —se percibe como un programa impuesto a Sur América por los Estados Unidos—. Algunas medidas de este último país —tales como la extradición, la fumigación de cultivos ilegales, la intervención militar contra los laboratorios de cocaína, y las sanciones económicas contra los países exportadores de cocaína— han provocado un gran sentimiento "antiyanqui". Además, la mayoría de los líderes latinoamericanos ven fundamentalmente imperfecto el tratamiento al control de la droga del lado de la oferta: según el punto de vista latinoamericano,

es la demanda, no la oferta, la que promueve el tráfico internacional de droga. Dice Alan García del Perú: "Siempre he pensado que el narcotráfico es la etapa final del consumismo capitalista. El problema no estriba en el hecho de que una población pobre produzca hojas de coca en la selva peruana. El problema básico está en los grandes mercados de consumo del mundo formados por las sociedades más ricas."<sup>2</sup>

Esto no quiere decir que la guerra a la droga en Sur América sea totalmente inútil. Al menos limita la incursión que los traficantes pueden hacer en el sistema político. Hoy día es bastante más difícil que a principios de los ochenta para los traficantes de cocaína ser candidatos a posiciones políticas, formar partidos políticos "nacionalistas", y ocupar posiciones a nivel ministerial. Pero el limitar las manifestaciones políticas más extravagantes del comercio de la cocaína no es lo mismo que refrenar las exportaciones de cocaína de Sur América. En este punto, los programas de los Estados Unidos y los de los mismos países andinos en su mayoría han fracasado.

Este libro no se escribió como una polémica contra las propuestas para el control de la droga en su fuente. Sin embargo, la investigación y las entrevistas realizadas por el autor y los consiguientes análisis llevan inevitablemente a varias conclusiones que quienes abogan por los programas de control en la fuente encontrarán desalentadoras. Primero, el tráfico de cocaína ha alterado irrevocablemente el panorama económico y político de los países andinos. Los traficantes de cocaína constituyen un grupo de interés con extensos recursos y conexiones políticas, igual que los barones cafeteros de Colombia o las élites mineras de Perú y Bolivia. Ciertamente, el estudio de los patrones de desarrollo de estos países sobre los procesos de toma de decisiones y sobre las relaciones con otros países ya no son posibles sin hacer referencia a la coca y a la cocaína.

Segundo, la guerra contra la droga en los países proveedores de Sur América presenta problemas difíciles, por no decir inmanejables, tanto para los gobiernos suramericanos como para el de los Estados Unidos. Dicha guerra requiere que los países andinos confronten una serie de obstáculos, tales como la dependencia económica en la droga, los poderosos "lobbies" del narcotráfico, el público indiferente u hostil, las estructuras políticas débiles y los sistemas porosos de justicia cri-

2. "El Presidente García Concede Entrevista a la TV Latina". Panavisión de Ciudad de Panamá, Julio 5 de 1987.

minal.  
la región  
democr  
son nec  
de la dr

Tercer  
gobier  
de la co  
de drog  
Lehder  
países a  
cocaína  
de cont  
lario: L  
selvas,  
los nort  
barones

minal. Además, otros intereses apremiantes de los Estados Unidos en la región —como promover la estabilidad económica, preservar la democracia, o prevenir el surgimiento de regímenes marxistas— no son necesariamente compatibles con los enérgicos programas de control de la droga.

Tercero, aún con una ayuda significativa de los Estados Unidos, los gobiernos andinos no tendrán mucho éxito en el control de la producción de la cocaína. Las campañas de erradicación, los decomisos ocasionales de droga, y algunas detenciones muy célebres (como la de Carlos Lehder en Colombia y Roberto Suárez en Bolivia) continuarán en los países andinos. Sin embargo, la estructura básica de la industria de la cocaína —su base agrícola, estructura de producción, liderazgo, red de contrabando, y demás— continuará más o menos intacta. El corolario: La victoria en la guerra contra la cocaína no se obtendrá en las selvas, tugurios y capitales de los países suramericanos; sólo cuando los norteamericanos decidan que no seguirán siendo los clientes de los barones de la droga, la industria se derrumbará.